



República de Colombia



Sala Cuarta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL - **SENTENCIA**
RADICACIÓN. 05 360 31 05 **002 2020 00244 01**
DEMANDANTE: LUZ ALBANY GUTIÉRREZ ECHAVARRÍA
DEMANDADO: CARROCERÍAS ROYAL SAS

Medellín, veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por las Magistradas LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2022, por el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare que entre las partes existe un contrato de trabajo a término indefinido desde el 4 de septiembre de 2015 que en la actualidad continúa vigente; en consecuencia, se condene a la demandada al pago de los salarios causados desde el 30 de mayo de 2015 que a 30 de junio de 2020 ascendían a \$25.205.000, más las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, todas estas acreencias causadas desde el año 2017, junto con las correspondientes sanciones por no consignación de las cesantías y el no pago de los intereses a las mismas; adicionalmente reclama que ante Colpensiones se efectúe la cancelación de 128,55 semanas de cotización en pensiones y la indexación de las sumas adeudadas. También solicitó como medidas cautelares oficiar a la CIFIN, al RUNT y a la Oficina de Instrumentos

Públicos para que se ordene el embargo y retención de los dineros, vehículos e inmuebles que se reporten en los registros de tales entidades (págs. 6-8 arch. 2, págs. 7-9 arch. 4 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que el 4 de septiembre de 2015 suscribió un contrato de trabajo con la demandada para desempeñarse como Directora de Gestión Humana; afirmó que para la data de presentación de la demanda cumplía un horario de 7 am a 5:30 pm, y devengaba \$1.700.000 mensuales pagaderos en 2 quincenas, pues esa suma fue la pactada en el contrato de trabajo y se ha mantenido constante sin ningún tipo de aumento o reajuste; desde el 30 de marzo de 2018 el empleador comenzó a incumplir las cláusulas contractuales al realizar pagos parciales y extemporáneos del salario conforme se detalla en el hecho 8°.

Manifestó que desde el año 2017 se dejó de efectuar el pago a seguridad social integral, y demás acreencias que reclama; el 20 de marzo de 2020 el representante legal de la compañía le notificó verbalmente que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, debía permanecer en casa hasta nuevo aviso, sin que a la fecha de radicación de la demanda le hubiera pedido reintegrarse a sus labores ni finalizar la relación laboral; ha efectuado varios requerimientos por whatsapp al representante legal con el fin de saber cuándo le cancelaría los dineros adeudados y reintegrarse a su labor, pero siempre le responde que debe esperar y que él le avisa cuándo puede volver, por lo que considera que el vínculo permanece vigente; siempre ha prestado en forma personal sus servicios atendiendo las instrucciones del empleador sin presentar quejas o llamados de atención (págs. 1-6 arch. 2, págs. 3-7 arch. 4 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Previa subsanación la demanda fue admitida mediante auto del 11 de diciembre de 2020, en el que además se negaron las medidas cautelares solicitadas y se ordenó la notificación y traslado a la demandada (arch. 5 C01), quien fue emplazada en cumplimiento del proveído del 22 de julio de 2021 (archs. 22, 25 *idem*) y se encuentra representada a través de Curador Ad Litem, auxiliar de la justicia que contestó con oposición a las pretensiones, sin constarle la mayoría de los hechos y propuso en su defensa la excepción previa de ineptitud de la demanda y la de fondo denominada prescripción (archs. 26, 27 C01).

III.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, en audiencia celebrada el 20 de abril de 2022, profirió sentencia en la que declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 4 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2018; en consecuencia, condenó a la demandada al pago de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones junto con la indexación de las sumas adeudadas y costas; la absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de los derechos causados con anterioridad al 30 de noviembre de 2017.

Para lo que interesa a la alzada, motivó la decisión en que solo es posible determinar los extremos temporales de la relación con el contrato de trabajo y la historia laboral adjuntos, última de donde se desprende que la demandada efectuó aportes hasta enero de 2018, sin que la demandante hubiera probado la existencia de la relación laboral más allá de esa data ni la suspensión de esta, como consecuencia del inicio de la pandemia por Covid-19 (arch. 31 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

La **demandante** señaló que *«se me está trasladando una carga probatoria que para mí es evidente dentro del expediente y es, que el contrato es a término indefinido, no podría presentar esa carga que dé la certeza de que la relación laboral continúa vigente porque no posee el documento para justificar que el empleador notificó o autorizó o dio preaviso a la no continuidad de la relación laboral»*.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, el demandante allegó un escrito denominado recurso de apelación, el cual fue rechazado en proveído del 18 de mayo de 2022 (archs. 2, 3 C02).

Posteriormente en providencia del 12 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación interpuesto en audiencia y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, en auto del 3 de marzo siguiente, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar; sin embargo, la demandante

presentó nuevamente un documento denominado recurso de apelación (archs. 4-6 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura debe indicar inicialmente en relación con el memorial que obra en el archivo 6 del C02, que no se **admitirán** argumentaciones adicionales que la recurrente no expuso dentro de la audiencia de que trata el art. 12 de la Ley 1149 de 2007, al tenor de lo dispuesto en el art. 66 del CPTSS; de manera que procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante en los estrictos términos indicados en la audiencia, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A *ídem*, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si la relación laboral continúa vigente.

No fue objeto de discusión que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido que inició el 4 de septiembre de 2015 y culminó el 31 de enero de 2018, tiempo en el que la demandante se desempeñó como Directora de Gestión Humana, pues así lo declaró la *a quo*, y se probó con el contrato y el reporte de semanas cotizadas en pensiones que aportó la demandante en las páginas 15, 16, 27 a 37 del archivo 1 del C01, motivo por el cual no se equivocó la juzgadora de instancia al fijar los extremos temporales de dicho vínculo en las mencionadas fechas, dado que la demandante no acreditó la prestación de servicios con posterioridad al 31 de enero de 2018.

Se afirma lo anterior porque si bien el art. 24 del CST estableció una presunción legal en cuanto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, le corresponde simplemente a quien alega la existencia de éste, acreditar la prestación del servicio personal y a quien se considera el presunto empleador, derruir tal presunción, desvirtuando la existencia de los demás elementos esenciales del contrato de trabajo enunciados en el art. 23 *ídem* (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015 y CSJ SL1420-2018).

No obstante, no se puede olvidar que nuestra legislación procesal ha instituido una serie de obligaciones, derechos, facultades y cargas atribuibles a todos aquellos que forman los distintos extremos que componen la relación jurídico-procesal, por lo que la persona que pretenda acudir ante la administración de justicia en calidad de demandante debe conocer como mínimo,

las responsabilidades propias de su condición, lo que se hace necesario para imprimir una mayor seriedad, diligencia y presteza a todos los asuntos conocidos por la jurisdicción.

De manera que no bastaba con que la demandante afirmara en el libelo introductor que el nexo contractual se extendió hasta por lo menos la fecha de su presentación (30 de noviembre de 2020 – arch. 1 C01), con el argumento de que presuntamente el representante legal de la empresa la envió a casa tras iniciar la pandemia de Covid-19 y que a la fecha no le ha indicado cuándo volver a la compañía, sino que debió demostrar en juicio que en verdad ejecutó esas labores como Directora de Gestión Humana, carga probatoria que corría en cabeza de ella, al tenor de lo dispuesto en los arts. 164 y 167 del CGP, pero no la cumplió (CSJ SL del 29 sep. 2005 rad. 24450, CSJ SL del 2 jul. 2008 rad. 24450, CSJ SL del 6 sep. 2012 rad. 37804 y CSJ SL del 20 mar. 2013 rad. 45120).

Tampoco se puede pasar por alto que, en virtud a que la demandada no compareció personalmente a notificarse del auto admisorio de la demanda encontrándose representada judicialmente por Curador *ad litem*, a quien no le consta ninguno de los hechos del libelo introductor, la carga de la prueba continuó en cabeza únicamente de la parte actora.

Nótese que adicional a los documentos anteriormente reseñados, la demandante solo aportó su cédula de ciudadanía y certificados de existencia y representación legal de la compañía de los que se desprende que la matrícula mercantil fue cancelada (págs. 18-24 archs. 1, 28 C01), más unos pantallazos de presuntas conversaciones sostenidas con el representante legal de la empresa (págs. 40-44 arch. 1, pág. 3 arch. 11 C01), y pese a que solicitó la práctica de pruebas testimoniales, no cumplió con el deber de hacerlas comparecer al juzgado de conformidad con el art. 78 del CGP, con el fin de probar sus dichos.

Aunado a lo anterior, se precisa que la jurisprudencia ordinaria laboral, ha sido clara en establecer que la afiliación a la seguridad social o el pago de los aportes al sistema, no conlleva, en principio, la existencia de una relación laboral, a menos que existan pruebas contundentes que así lo acrediten (CSJ SL16528-2016), y que la misma es un elemento indiciario para acreditar tiempo y extremos temporales de una relación laboral, pero no es plena prueba de la misma (CSJ SL del 15 mar. 2011 rad. 37067), de ahí que la *a quo* no haya incurrido en yerro al valorar, de acuerdo con el art. 61 del CPTSS, el reporte de semanas expedido

por Colpensiones (págs. 27 a 37 arch. 1 C01), con el que se colige el pago por parte de Carrocerías Royal SAS, de aportes a pensión a razón de 30 días por mes y un IBC de \$1.700.000, durante el lapso comprendido entre el 4 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2018, en la medida en que se itera, del restante caudal probatorio aportado, no se verifica ni siquiera la ejecución de la fuerza de trabajo en favor de la demandada durante ese período, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se pudo haber desarrollado la misma, como para establecer con certeza que en efecto Luz Albany Gutiérrez prestó servicios por lo menos hasta la fecha de presentación de la demanda (30 de noviembre de 2020 – arch. 1 C01), y así activar en su favor, la presunción a la cual se hizo alusión.

Por lo demás, tampoco es posible deducir los elementos constitutivos de un contrato de trabajo de los pantallazos aportados de presuntas conversaciones sostenidas por la aplicación digital *whatsapp* entre la demandante y el representante legal de la demandada, porque para ello es necesario ejecutar otra actividad probatoria tendiente a demostrar la validez en la trazabilidad del supuesto diálogo, así como el origen específico del emisor y la autenticidad del receptor o destinatario de cada mensaje, lo que aquí no se llevó a cabo; además, de allí no se vislumbran cuáles fueron las instrucciones atendidas por la demandante con posterioridad al 31 de enero de 2018, ni qué labores ejecutó como Directora de Gestión Humana mientras estaba en casa; no se acredita lo relativo a la aparente orden impartida de hacer trabajo en casa desde el inicio de la pandemia por Covid-19, aunado a que de ninguna de estas conversaciones se puede colegir la fecha de emisión. De ahí que, nuevamente, las afirmaciones hechas en la demanda, quedaron solo en eso, en tesis u opiniones, dada la orfandad probatoria atribuible a la parte actora.

Así las cosas, siendo evidente la actitud pasiva y desidia de la demandante en cuanto al cumplimiento del principio de la carga de la prueba, bastan estas consideraciones para **confirmar** la sentencia apelada. Sin costas en la alzada ante su no causación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 20 de abril de 2022 por el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí -Antioquia, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas en la alzada ante su no causación.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpkgdBpWQA9PILJbqMBqijEBpvWSieKk1pRaoyUWcKYCEg?e=HhdnYj](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpkgdBpWQA9PILJbqMBqijEBpvWSieKk1pRaoyUWcKYCEg?e=HhdnYj)

Firmado Por:

Luz Patricia Quintero Calle

Magistrada

Sala 017 Laboral

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **967dc72e147dbb31ef1d3c6c78a2959069071f99ce85771cad7d31dc9c8ac6b8**

Documento generado en 27/11/2023 03:27:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>